

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por GLORIA MARÍA DUQUE DUQUE en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS (Radicado 05001-31-05-010-2019-00040-01).

### ANTECEDENTES

Pretende la demandante que se declare la ineficacia del traslado realizado al RAIS por medio de la AFP Colfondos S.A., y que sea esta quien devuelva con destino a la administradora de prima media, los valores atinentes a los aportes realizados, incluyendo rendimientos y sin lugar a descontar los gastos de administración efectuados; que una vez surtida esta devolución se tenga como afiliada al RPM, y que sea entonces Colpensiones quien realice el reconocimiento y pago de las correspondientes mesadas pensionales a las que actualmente tiene derecho, bajo cálculo diferencial señalado en escrito genitor, incluyendo de manera retroactiva, los valores que se desprenden de la diferencia entre la mesada que actualmente devenga, y la que habría de obtener según cálculo efectuado en el RPM. Por otro lado, solicitó que se condenara a Colpensiones, al pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, o

en su lugar, que se realice la indexación de las condenas señaladas. De igual forma, solicitó que se condene en costas a las entidades accionadas. De manera subsidiaria, pretende que se condene a Colfondos S.A. a pagar a título de indemnización de perjuicios el valor equivalente que hubiera recibido la accionante de haberse pensionado en el RPM, aplicando de esta manera, el IBL y la tasa de reemplazo del 61%.

Para sustentar sus súplicas, narró: nació el día 12 de mayo de 1961; al inicio de su vida laboral, empezó a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social, mediante el extinto ISS hoy Colpensiones, y más concretamente desde el 6 de diciembre de 1985 hasta el 30 de noviembre de 1995; posteriormente, decidió efectuar cambio de sistema pensional, trasladándose al RAIS por medio de la AFP Colfondos S.A. desde el día 27 de noviembre de 1995, entidad a la que permanece afiliada actualmente, contando con alrededor de 952 desde su vinculación a dicho fondo, para un total de 1332 semanas cotizadas entre ambos regímenes; señala que, en el marco de dicho acto jurídico, no le brindaron asesoría ni al momento de producirse su afiliación ni al momento en que cumplió la edad de 47 años; a partir del 3 de octubre del 2018, el fondo accionado, reconoció prestación pensional, a título de garantía de pensión mínima; manifiesta que le indicaron que la re asesoría pensional solo se obtiene a petición del interesado, y que además, no había viabilidad para autorizar su traslado al RPM; de igual forma, Colpensiones, le indicó a la actora, que no era procedente su solicitud de retorno a dicha entidad.

Colpensiones como entidad accionada, allegó respuesta en el término oportuno, en la cual se sirvió de oponerse a lo pretendido por la actora, manifestando para el efecto que, en el presente caso, no se cumplen los requisitos fijados en la SU 062-2010 o la C-789 de 2002, ni los lineamientos de la ley 797 de 2003, y que, por lo tanto, no puede autorizarse su retorno al RPM. Sobre los hechos, aceptó la fecha de nacimiento de la

demandante, su afiliación inicial al ISS hoy Colpensiones y su posterior traslado a la AFP Colfondos S.A., incluyendo la densidad de semanas cotizadas en ambos regímenes, y las respuestas que remitieron ambas demandadas con motivo de solicitud de traslado de la accionante. De los demás hechos dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Como excepciones de mérito, formuló: inexistencia de nulidad y/o ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, improcedencia de la afiliación, inexistencia de la obligación de aceptar traslado de régimen y de reconocer la pensión de vejez de manera retroactiva, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, imposibilidad de condena en costas y buena fe de Colpensiones.

Colfondos S.A. de igual forma, arrió contestación al libelo introductorio, en la cual se sirvió de oponerse a la prosperidad de todas las pretensiones incoadas, exponiendo para el efecto sus razones de hecho y derecho. Con respecto a lo narrado en la demanda, manifestó que es cierta la data de nacimiento de la actora, la afiliación realizada a su entidad, y las respuestas que emitió la demandada ante la petición presentada por la accionante; de los demás dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Como excepción previa, enarboló: falta de integración del contradictorio. Como excepciones de fondo, propuso: cumplimiento de las obligaciones para el traslado, prescripción, buena fe, compensación y pago

De igual forma, presentó demanda de reconvención, en la que pretendió que la accionante, devuelva los rendimientos financieros generados a razón de las mesadas pensionales que se causaron desde el 1º de octubre de 2018 o la indexación de la suma que a continuación se indica, que se realizara la respectiva devolución de todas las mesadas pensionales, que se suspendiera el reconocimiento pensional hasta tanto no se realizara la

devolución de los dineros señalados, y que se condenara en costas a la demandante.

Sobre dicha demanda, la actora allegó su contestación en la que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, señalando que los dineros que se refieren en el litigio son de propiedad exclusiva de la demandante y no del fondo demandado. Sobre los hechos, afirmó que todos son ciertos, excepto en el que se asevera que la demandante recibió la debida asesoría por parte del fondo señalado.

Luego de que fuera practicada la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio el día 27 de enero de 2022, se ordenó integrar el litisconsorcio con El Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Así las cosas, este ministerio presentó su contestación de demanda, en la cual manifestó su oposición frente a todo lo deprecado, señalando que la cartera que representa no tiene ningún deber en cuanto a la declaratoria de ineficacia del traslado aludido. Sobre los hechos, tuvo como ciertos la fecha de nacimiento de la demandante, la afiliación inicial al ISS hoy Colpensiones, el traslado que se realizó con destino a Colfondos S.A. y el reconocimiento de garantía de pensión mínima que se le otorgó a la actora; de los demás dijo que no eran ciertos. Como excepciones de mérito planteó las siguientes: falta de legitimación en la causa por pasiva, la oficina de bonos pensionales no funge como entidad de previsión social ni fondo ni administrador pensional, prescripción y aplicación del artículo 282 de la ley 1564 del 12 de julio de 2012 “por medio de la cual se expide el código general del proceso y se dictan otras disposiciones”.

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2022, ordenó lo siguiente:

**PRIMERO:** *ABSOLVER a COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. y al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO -OBP de la pretensión encaminada a la declaratoria de ineficacia de la afiliación de GLORIA MARÍA DUQUE DUQUE por las razones expuestas en la sentencia.*

**SEGUNDO:** *CONDENAR a COLFONDOS S.A. a pagar a GLORIA MARÍA DUQUE DUQUE a título de indemnización de perjuicios causados, las diferencias de la mesada pensional reconocida a GLORIA MARÍA DUQUE DUQUE en el RAIS y la estimada por el Juzgado que hubiese alcanzado en el RPMPD, diferencias entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de agosto de 2022 que suman \$72.903.739, monto que deberá ser pagado con indexación la que se calculará por COLFONDOS S.A. al momento del pago efectivo. A partir del 1 de septiembre de 2022, a título de indemnización de perjuicios COLFONDOS S.A. continuará pagando a la demandante la pensión de vejez en la totalidad de la mesada que le habría correspondido en el RPM en forma vitalicia y transmisible a sus beneficiarios en una cuantía de \$2 325.386 sin perjuicio de los incrementos anuales de Ley que disponga el Gobierno Nacional.*

**TERCERO:** *Se declara no probada la excepción de prescripción. Se ABSUELVE a la demandante de las pretensiones formuladas en su contra en la demanda de reconvención.*

**CUARTO:** *Costas como se dijo en la parte considerativa de esta sentencia.*

**QUINTO:** *En caso de no ser apelada esta providencia se ordena el archivo del expediente y su des anotación en el Sistema de Información Judicial.*

Inconforme con la decisión proferida, la apoderada de Colfondos S.A. presentó recurso de apelación, para solicitar que no debe haber lugar al reconocimiento de los perjuicios otorgados, ya que el juez de instancia toma como argumentos, que se demuestra que no ha existido otorgamiento de información por parte del fondo, que se prevén los perjuicios, y cumplir con el requisito de la prescripción del artículo 151 del Código Procesal del trabajo. Indica que cuando se habla de perjuicios, los mismos deben ser probados de manera clara y fehaciente dentro del proceso. Acepta que en

verdad existe una diferencia de mesada pensional, pero este hecho por sí solo no demuestra la causación de un perjuicio. La diferencia entre los regímenes es de conocimiento público, y que, entre otras cosas, la demandante lo eligió de forma libre. Dentro de la demanda no se explica el verdadero perjuicio causado a la demandante. A pesar de que el juez hace una referencia jurisprudencial, no tiene en cuenta que dicho perjuicio debe ser probado. Por lo tanto, sostiene que la sentencia debe ser revocada. Respecto a la declaratoria de ineficacia, objeta la condena en costas, ya que la parte demandante no fue condenada no obstante no haya salido avante la pretensión principal.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio al punto objeto de apelación planteado por la parte recurrente, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, y que no es otro que el que apunta a los perjuicios reconocidos.

Fuera de toda discusión por obrar plena prueba de ello en el plenario, se pudo establecer que la demandante nació el día 12 de mayo de 1961 (archivo 4 página 5); que al inicio de su vida laboral, se encontraba afiliada al extinto ISS hoy Colpensiones desde el 6 de diciembre de 1985 (archivo 4 página 8); que posteriormente decidió realizar traslado de sistema pensional a Colfondos S.A. desde el 27 de noviembre de 1995 (archivo 4 página 7); y que la señora Duque Duque adquirió calidad de pensionada, la cual fue reconocida por la AFP Colfondos S.A. desde el mes de octubre de 2018 (archivo 4 página 32).

Atendiendo a estos hechos, el problema jurídico a esclarecer en esta instancia, partiendo de lo que debe estudiarse por el recurso de apelación interpuesto, se circunscribe a darle respuesta a un interrogante básico: 1. La condena por concepto de indemnización plena de perjuicios se encuentra o no ajustada a la ley? No obstante, si quiere destacarse que ya es criterio reiterado en la jurisprudencia laboral, tal como a bien tuvo en señalarlo el fallador de primer grado, que cuando quien solicita la ineficacia se encuentra ya pensionado por el RAIS, esta no procede. Al respecto baste recordar que la Sala Laboral de esta Corporación en sentencia de unificación del 14 de agosto de 2019 así lo concluyó, e igual criterio ratificado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia SL373-2021, así lo ha considerado. En esta última quedó dicho:

*“Ahora bien, aunque el cargo es fundado en cuanto a la inobservancia del deber de información, la Corte no casará la sentencia del Tribunal porque en sede de instancia llegaría a la misma conclusión absolutoria, pero por otras razones.*

*Es un hecho acreditado que Cárdenas Gil disfruta de una pensión de vejez desde el año 2008, en la modalidad de retiro programado, a cargo de Protección S.A. Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD.*

*Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante)<sup>1</sup>, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones:*

---

<sup>1</sup> SL1688-2019, SL3464-2019

*Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.*

*Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.*

*Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.*

*Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.*

*Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requeriría la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defienda los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.*



*Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.*

*La Corte podría discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la invalidación del estado de pensionado. No obstante, considera que los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones”*

Ahora bien, en lo que hace al interrogante inicialmente planteado, para el cual se anticipa una decisión totalmente contraria a la que llegó el *a quo*, no porque los perjuicios no procedan, sino porque en la forma como se reconocieron, se estima que jurídicamente no resultan correctos.

Para este fin, lo primero por señalar es que la Ley 100 de 1993 creó dos sistemas de pensiones completamente independientes y autónomos pero que coexisten: el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tal como se señala en su artículo 12, los cuales les brindan a sus afiliados una serie de beneficios conforme a que se encuentren en uno u otro sistema.

El artículo 32 de la referida Ley 100 define las características del Régimen de Prima Media con Prestación definida, encontrando que es un régimen solidario de prestación definida y que los aportes de los afiliados junto con sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, y que “*El Estado garantiza el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados*”.

Por el contrario, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y de sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad mediante la garantía de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad, teniendo claro que cada afiliado a este régimen cuenta con su propia cuenta de ahorro individual, y las características de este se encuentran contenidas en el artículo 60 de la Ley 100, dentro de las que se destacan que el reconocimiento y pago de las prestaciones dependerá de los aportes de los afiliados y sus empleadores, sus rendimientos financieros y de los subsidios del Estado cuando haya lugar; que los afiliados podrán libremente trasladarse entre administradores y entre Fondos de Pensiones gestionadas por ellas según regulación aplicable; que el conjunto de las cuentas de ahorro individual constituyen un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados y que, en el caso de que las entidades administradoras o aseguradoras incumplan con sus obligaciones, el Estado garantiza los ahorros de los afiliados y el pago de las pensiones a que este tenga derecho.

En cuanto al reconocimiento de la pensión de vejez, las condiciones para acceder a esta prestación varía ostensiblemente de un régimen pensional a otro, por cuanto en el de Prima Media con Prestación Definida, sus requisitos se encuentran consagrados en el artículo 33 de la plurialudida Ley 100, destacándose que cualquier afiliado que los cumpla accede de manera inmediata al reconocimiento de esta prestación, requisitos que se pueden resumir en que se alcancen los 62 años en el caso de los hombres y 57 años para las mujeres y un total de 1300 semanas cotizadas o servidas, mientras en el Régimen de Ahorro Individual tal prestación está condicionada de un lado, al capital con sus rendimientos que tenga el afiliado en su cuenta de ahorro pensional que *“...les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley”* con los reajuste anuales según la variación del IPC certificado por el DANE y, del otro, una densidad mínima de semanas, la manifestación de la imposibilidad de seguir

cotizando más el cumplimiento de cierta edad dependiendo si es hombre o mujer para acceder al subsidio de la garantía de pensión mínima.

El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad tiene establecido en el Capítulo V de la Ley 100 las diferentes modalidades de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, encontrando que son: renta vitalicia inmediata, retiro programado, retiro programado con renta vitalicia o las demás que autorice la Superintendencia Financiera (Circular 013 de 2012, Superfinanciera), modalidades que para su aplicación van a depender exclusivamente del monto que tenga el afiliado en su cuenta de ahorro pensional, destacándose que el disfrute de la prestación puede ser a cualquier edad, por lo que es una elección que a voluntad puede elegir el afiliado en cualquier etapa de su afiliación con dicho régimen, con la condición, como se dijo, de que el monto de la cuenta de ahorro individual cumpla con las exigencias de la modalidad a la cual pretende acceder.

Como beneficio adicional al disfrute de la pensión a cualquier edad, este sistema ofrece igualmente la posibilidad de que en el caso de escogerse el retiro programado y el afiliado fallece sin dejar beneficiarios, los saldos que queden en la cuenta de ahorro individual acrecerán la masa sucesoral, igual beneficio en el caso de morir un afiliado o un pensionado sin dejar beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, y en el caso de no poder acceder a ninguna prestación del sistema, habrá lugar a la devolución del saldo abonado en la cuenta individual de ahorro pensional, a más de las prestaciones y beneficios adicionales contenidos en el artículo 85.

Debe indicarse que en el Régimen de Prima Media tales beneficios no existen, pues el modelo está diseñado para conceder las prestaciones bien al afiliado ora a sus beneficiarios, sin que ningún capital pueda hacer parte de la masa sucesoral en caso de muerte, pues no puede perderse de vista que dentro de las características de este sistema es que es un fondo común, se maneja como una unidad y no de manera particular y, en el caso de que el afiliado o sus beneficiarios no cumplan con los requisitos para acceder a

las prestaciones que brinda el sistema, en sustitución recibirán una indemnización sustitutiva en la forma descrita por la ley.

Bajo estas condiciones, no resultaría dable considerar que los perjuicios que pueda tener un afiliado de un sistema o de otro solo se puedan medir al momento en que éste cumple con los requisitos para adquirir las pensiones de vejez, y a esa data liquidar el monto de la prestación que le correspondería en cada sistema, por cuanto mientras estuvo vigente la relación que los afiliados mantuvieron con las administradoras del Régimen de Ahorro Individual, gozaban de unos privilegios con los cuales no contaban los del Régimen de Prima Media como se señaló anteriormente, y que si bien tales beneficios no se generan al poder el afiliado acceder a la pensión de vejez, resulta completamente inapropiado dejar solo la medición de los efectos del traslado de régimen en el comparativo del valor de la mesada pensional que le ofrece uno u otro sistema.

No está por lo demás rememorar que distintas Salas de Decisión de esta Corporación, frente a casos que guardan similitud al presente, han arribado a una conclusión semejante. Al respecto pueden verse las siguientes: Gloria Patricia Idárraga Torres contra Porvenir (radicado 05001310501720210025902); Mario Alberto Gómez Rojas contra Porvenir, S.A., Colpensiones y La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público (radicado 05001310500120190009301), y Carlos Humberto Pineda Montoya contra Colpensiones y Protección S.A., al que fue vinculado la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público (radicado 05001310501520190057101).

En esta última, de esta misma Sala Quinta, se anotó:

*“En este sentido fue fijado el litigio por la a quo “El litigio girará en torno a determinar si el traslado de régimen que hizo el señor CARLOS HUMBERTO PINEDA MONTOYA, del régimen de prima media a la AFP PROTECCION fue INEFICAZ, y si como consecuencia de lo anterior, se debe condenar a PROTECCION S.A., a trasladar a COLPENSIONES el saldo de la cuenta de*

*ahorro individual del demandante con sus rendimientos, frutos, intereses, sumas adicionales y comisiones y así mismo ordenar a COLPENSIONES a reactivar su afiliación en el régimen de prima media. De ser procedente lo anterior, se entrará a analizar si se debe condenar a PROTECCIÓN S.A. al reconocimiento y pago de perjuicios, tasados en las mesadas que le corresponderían en el régimen de prima media, mientras Colpensiones le paga la pensión, más los honorarios del mandatario judicial*"

*Argumento de carácter procesal, que resultaría suficiente para que la Sala no emitiera pronunciamiento sobre la indemnización de perjuicios en virtud del principio de consonancia, no obstante, si en gracia de discusión se considerara que en un ejercicio interpretativo amplio es posible considerar que la pretensión última del demandante es el reconocimiento de la diferencia pensional, igualmente debe concluirse que la misma no tiene vocación de éxito, dado que no se acreditaron los elementos de la responsabilidad civil de la AFP"*

Siendo lo anterior así, y dado que la condena impuesta estuvo sustentada en la diferencia pensional entre los diferentes sistemas, y que en el plenario no se avizora alguna prueba que dé cuenta de algún perjuicio sufrido por el actor diferente a estas cuantías, habrá lugar a revocar la sentencia venida en apelación, dando cuenta de ello en la parte resolutive de esta providencia.

Las costas de las instancias a cargo de la parte demandante y a favor de las partes demandadas. Como agencias en derecho en esta se fija la suma de medio (1/2) salario mínimo legal mensual para cada una de éstas últimas.

## DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación, salvo en cuanto a los perjuicios reconocidos, punto que **REVOCA** y, en su lugar,

ABSUELVE a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, de los mismos.

Costas de las instancias a cargo de la parte actora y a favor de las accionadas. Como agencias en derecho, para cada una de ellas, en esta instancia se fija la suma de medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO.

**Los Magistrados,**



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SIN FIRMA POR PERMISO AUTORIZADO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310501020190004001</b>
<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Demandante:</b>	<b>GLORIA MARIA DUQUE DUQUE</b>
<b>Demandado:</b>	<b>COLPENSIONES Y OTROS</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>4/05/2023</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONFIRMA Y REVOCA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 5/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario